

# El Gobierno promete tras las protestas más becas y fondos para el plan Bolonia

El responsable de Universidades dice que el dinero no será impedimento para cursar estudios superiores

R.G.

SEVILLA.— El Gobierno reconoció ayer que la adaptación al conocido como Plan Bolonia requiere que las universidades dispongan de más dinero y que hacen falta más becas para los alumnos.

Los dos requisitos los planteó ayer, tras semanas de duras protestas por una parte de la comunidad universitaria, el secretario de Estado de Universidades, Márius Rubiralta, después de inaugurar el edificio de Servicios de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y de visitar la plaza Sony del parque científico y tecnológico Cartuja 93, donde se va a construir el Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Sevilla.

Durante su intervención, de hecho, el mandatario garantizó que el Ministerio de Ciencia e Innovación ayudará a los rectores de las universidades españolas en la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y que mejorará el sistema de becas para grados y máster, con el objetivo de garantizar el acceso. Una de las quejas, precisamente, más repetidas por el movimiento anti Bolonia, que acusa a este proyecto de hacer de los máster una enseñanza «elitista» y de «privatizarlos».

La universidad española, basada en la cultura humanística y científica, debe de modernizarse para poder competir en el entorno global, mejorando la excelencia, la internacionalización y la atracción y conservación de talentos, pero «sin olvidar que tiene una función social por la cual debe de garantizar que cualquier persona, independientemente de su condición económica, tenga acceso a estudios superiores», argumentó Rubiralta, que en todo momento eludió referirse a quienes se oponen a Bolonia y han protagonizado en diferentes ciudades, entre ellas Sevilla especialmente, protestas, encie-



De izquierda a derecha, Francisco Andrés Triguero, Juan Jiménez, Márius Rubiralta y José María Delgado, en la Olavide. / EL MUNDO

ros y hasta agresiones.

El responsable de Universidades insistió, no obstante, en que el Ministerio se «esforzará» por que «no existan dudas de que se mejorará el sistema de becas y ayudas para los nuevos grados y máster», actuando de «manera directa» y controlando los precios de éstos últimos, que son una «oportunidad para los profesionales que quieren mejorar su formación con calidad y a precios públicos».

Asimismo, tras elogiar el esfuerzo realizado por las universidades por adaptar sus planes de estudio al espacio europeo de educación superior, Márius Rubiralta reconoció que estos cambios «requieren un soporte de financiación importante en muchos niveles diferentes», por lo que «algu-

nas líneas de trabajo del Ministerio deberán de reforzarse».

En este sentido, apostó por «eliminar barreras burocráticas para simplificar y agilizar los procesos de verificación de nuevos grados en el ámbito de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca)». No obstante, especificó que, en la actualidad, más de 850 planes de estudios ya han presentado su verificación, llegando de esta manera «casi al ecuador del proceso».

Acercar del Centro de Transferencia Tecnológica de la Universidad de Sevilla, un edificio que albergará proyectos conjuntos entre la Hispalense y las empresas del entorno y que constituirá el epicentro del 'campus de excelencia internacional' previsto en la Car-

tuja, Rubiralta subrayó que Sevilla tiene indicadores «excelentes que se conforman como un potencial de gran relevancia» para incorporarse a dicho programa.

Durante la inauguración del edificio central de Investigación de la UPO, el secretario de Estado de Universidad —que estuvo acompañado por el responsable andaluz de Universidades, Francisco Andrés Triguero; el rector de la Olavide, Juan Jiménez; y el director de dichos Servicios, José María Delgado— destacó la importancia de la creación de nuevos centros de investigación como «un paso más» hacia la construcción de un campus de excelencia basado en la docencia, la investigación y la transferencia de conocimientos.

## Educación quitará los conciertos a once colegios que no son mixtos

SEVILLA.— La Consejería de Educación no renovará para el próximo curso 2009/2010 los conciertos educativos a aquellos centros públicos y concertados cuyo alumnado esté sujeto a una distinción de sexo, unas condiciones que actualmente se mantienen en once centros.

La Consejería de la que es titular Teresa Jiménez publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del pasado día 5 la orden que establece las normas que regirán la convocatoria de conciertos educativos y su renovación, que, en el punto 17, señalan que «la persona física o jurídica titular del centro se obliga al cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente sobre escolarización del alumnado, especialmente en lo relativo a la no discriminación por las razones que en dicha normativa se contemplan en desarrollo del artículo 84.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo».

Este, en referencia a la admisión de alumnos y la escolarización en centros públicos y privados concertados, contempla que «en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

No obstante, actualmente hay once centros que no permiten el acceso de alguno de los dos sexos. Según informó ayer Europa Press, en Sevilla, los centros son el Ángela Guerrero, Albayda, Ribamar y Altair, además de Nuestra Señora de Lourdes (Carmona); en Córdoba, Ahlzhair y Zalima, en la capital, y Torrealba (Almodóvar del Río) y Yucatal (Posadas); en Almería, el centro de FP Campomar (Aguadulce); y en Granada, El Soto de Chau-china.

Esta distinción de sexo llevó al Tribunal Supremo (TS) a avalar al Gobierno de Castilla La Mancha a la hora de impedir la separación por sexos del alumnado adscrito a centros dependientes de la financiación pública. El mencionado fallo, concretamente, estima que la Administración puede exigir a los centros concertados la enseñanza mixta para recibir sus fondos.

REYES GÓMEZ

SEVILLA.— El anuncio efectuado ayer por la Junta de Andalucía sobre la convocatoria, el próximo día 19, de la mesa sectorial de Educación para «analizar» el adelanto del curso escolar no ha aplacado los ánimos de los sindicatos de la enseñanza. Más bien, al contrario, pues ayer mismo hicieron frente común para exigir que el Gobierno andaluz dé marcha atrás en este proyecto.

Así, ANPE, CCOO, Csi-Csif, UGT y el sindicato de interinos SADI, todos ellos miembros de la mesa sectorial convocada por la Consejería, reclamaron la retirada del borrador de decreto que regula el calendario y la jornada escolar. La misma demanda que planteó la Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía (APIA), también por entender que la medida propuesta por la Consejería de Educación no servirá para mejorar los in-

## Los docentes anuncian protestas contra el adelanto del curso

La Consejería les convoca, después que a los padres, para «analizar» su propuesta de empezar las clases una semana antes

dices de rendimiento académico de los alumnos.

Los sindicatos de enseñanza también critican el modo elegido por el departamento que dirige Teresa Jiménez para plantear una modificación tan sustancial: en pleno periodo de vacaciones navideñas, sin consensuar... y llamando a las asociaciones de padres en primer lugar para abordar este asunto.

En este sentido, el manifiesto

hecho público ayer por los citados representantes de la mesa sectorial «denuncia las formas y maneras con que viene actuando la Consejería de Educación, al publicar documentos de gran importancia para el profesorado y el sistema educativo de Andalucía sin previa consulta con las organizaciones sindicales representativas del profesorado».

Los sindicatos rechazan unánimemente la idea de Jiménez de

adelantar el comienzo de curso una semana porque, «para un adecuado desarrollo del curso, que repercuta directamente en la educación que reciben los alumnos y en la mejora del sistema educativo, se requiere de una apropiada y amplia planificación» al principio de cada año académico.

Además, comenzar antes las clases supone más trabajo, cuando, de momento, «la Junta nunca cumple

y los cursos comienzan con las plantillas incompletas», señalan, antes de recordar que «la gestión de provisión de puestos de trabajo, con las garantías suficientes de transparencia, requiere de unos tiempos y plazos que se alargan».

Desde el punto de vista de los docentes, las actividades extraescolares están bien como método para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, aunque no son «la panacea» y nada tienen que ve con la enseñanza, por lo que «en nada deben coincidir con la actividad docente y lectiva de los centros que imparte el profesorado» y es un trabajo que debe recaer en personal «especialista».

Por todo ello, al igual que la APIA, ANPE, CCOO, Csi-Csif, UGT y el SADI se oponen al borrador de decreto y exigen el inicio de «negociaciones» de un nuevo texto. En caso contrario, no descartan convocar movilizaciones